**Proyecto de Ley \_\_\_ de 2020 Cámara**

**“Por medio del cual se modifica el artículo 10 de la ley 1119 de 2006 por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones.”**

**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA:**

**Artículo 10: “SUSPENSIÓN.** Las autoridades de que trata el artículo [32](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2535_1993.html#32) del Decreto 2535 de 1993, excepcionalmente podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales. Estas autoridades, también podrán ordenar la suspensión de los permisos de manera individual a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales, previo concepto del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, cuando a juicio de las mismas, las condiciones que dieron origen a la concesión original han desaparecido.

Si el titular del permiso respecto del cual se dispuso la suspensión individual, no devuelve el arma a la autoridad militar competente en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la disposición que la ordenó, procederá su decomiso, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Cuando la suspensión sea de carácter general, los titulares no podrán portar las armas.

**PARÁGRAFO 1o.** Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar competente la adopción de la suspensión general, de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa Nacional.

**PARÁGRAFO 2o.** La autoridad militar que disponga la suspensión general de la vigencia de los permisos, podrá autorizar o no de manera especial o individual el porte de armas a solicitud del titular o del gobernador o alcalde respectivo, previo estudio detallado de las circunstancias y argumentos de seguridad nacional y seguridad pública que la invocan.

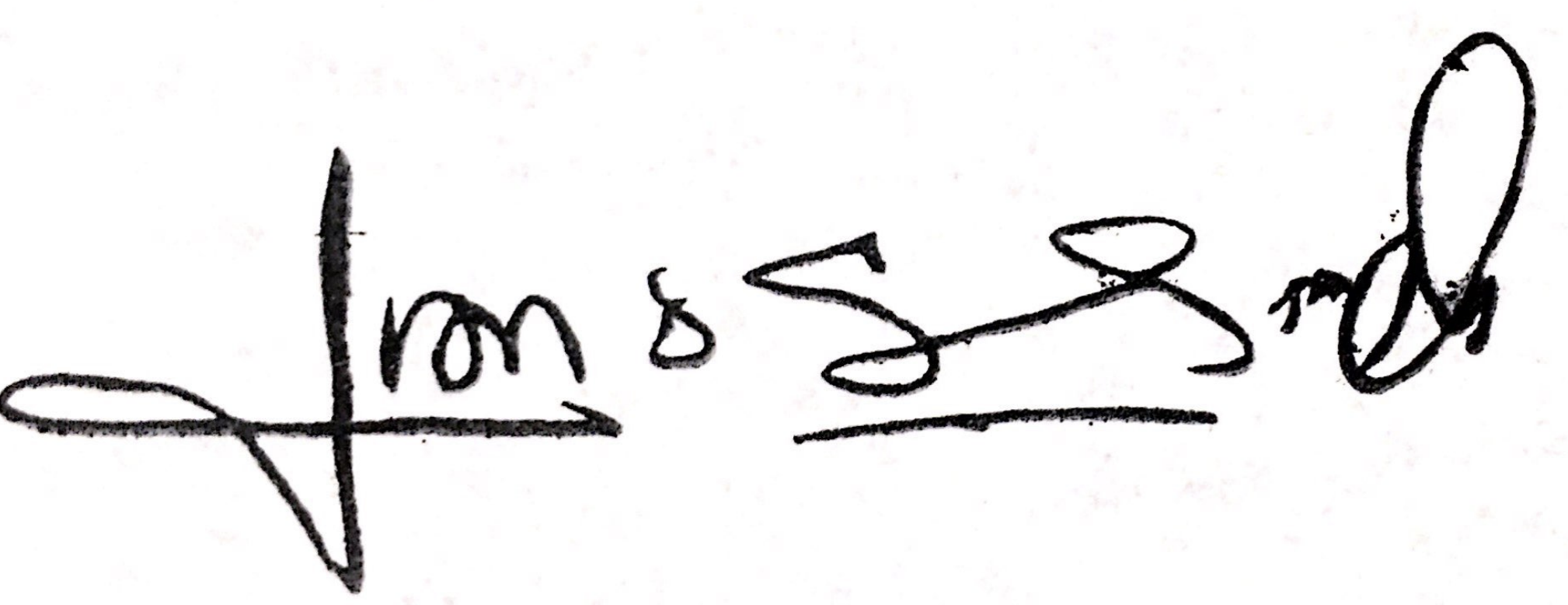
**PARÁGRAFO 3o.** El Gobierno Nacional a través de las autoridades contempladas en el artículo [32](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2535_1993.html#32) del Decreto 2535 de 1993 podrá prohibir en algunas partes del territorio nacional el porte y/o tenencia de armas de fuego a las personas naturales, jurídicas y extranjeras.

Se exceptúan a las empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada y los departamentos de seguridad debidamente constituidos ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y autorizadas por esta.

Las personas que al entrar en vigencia una medida de suspensión temporal tengan en su poder o porten armas de fuego con permiso vigente, deberán presentarlas entregarlas en la Unidad Militar de su jurisdicción dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de esta disposición, por lo cual se les reconocerá una compensación en dinero por cada arma entregada, conforme a la tabla de avalúo del Comando de las Fuerzas Militares establecida y se les descargará del sistema.

**Vigencia**. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

De los Honorables Congresistas,



**H.R. JUAN CARLOS WILLS OSPINA**

Representante a la Cámara

**Proyecto de Ley \_\_\_ de 2020 Cámara**

**“Por medio del cual se modifica el artículo 10 de la ley 1119 de 2006 por la cual se actualizan los registros y permisos vencidos para el control al porte y tenencia de las armas de fuego y se dictan otras disposiciones.”**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**1. CONCEPTOS PREVIOS FRENTE A LAS ARMAS Y EL PERMISO PARA EL PORTE Y TENENCIA DE LAS MISMAS**

El debate frente la suspensión de los permisos para porte y tenencia de armas, sin lugar a dudas ha ido tomando fuerza y relevancia en el país. Es por esto que se hace necesario realizar un análisis profundo sobre lo que se entiende por armas, porte y tenencia de las mismas, el inicio jurídico de dichas concepciones, la comparación de regulación con otros países, entre otros.

El porte de armas, de acuerdo a lo definido por el Ministerio de Defensa es la “acción de llevar consigo o al alcance un arma de defensa personal, con el respectivo permiso expedido por autoridad competente”. De la misma manera, la tenencia de armas fue definida como la “posesión de un arma dentro de un bien inmueble registrado. Solo autoriza el uso de las armas dentro de ese inmueble al titular del permiso o a sus moradores”. Es por esto que se hace necesario resaltar la importancia de no confundir o igualar los conceptos previamente señalados, ya que la consecución del uno no presupone lo mismo del otro.

Lester H. Hunt, profesor de filosofía de la Universidad de Wisconsin en Madison, Estados unidos y autor de numerosas obras de temas sobre filosofía política, ética y problemas morales contemporáneos, en el 2016 escribió junto con David DeGrazia la obra “Debate sobre control de armas: ¿Qué tanta regulación necesitamos?”, en la cual argumentó que “la suposición de que las armas de fuego sean un “mal” social, debe ser tolerado solo a regañadientes o eliminado completamente”. El mismo argumenta esta posición realizando una comparación con otras cosas que a menudo también tienen un “estatus moral negativo” y exponiendo que “hay otras cosas que se tratan a menudo de esta manera, incluyendo, por ejemplo, la pornografía, el alcohol, el tabaco y diversas drogas psicoactivas (…) Cuando esos bienes y servicios no están prohibidos completamente, están sometidos a leyes que los hacen menos disponibles” es por esto que a pesar del mismo oponerse en general al control de las armas, se muestra de acuerdo en realizar una debida regulación de las mismas, como es el caso de la prohibición de venta a niños, delincuentes o incapaces mentales; sin embargo reitera que si se deja de lado la concepción plantada en renglones anteriores sobre el estatus moral negativo de las armas, estaría clara la necesidad de defender el derecho a poseer armas, entendiéndose este al derecho de autodefensa, o como lo llamamos en nuestro país, defensa propia.

Dicho lo anterior, Lester H. Hunt realiza un planteamiento en el cual se basa el presente proyecto de ley y que tiene vital trascendencia, cuando argumenta “si se tiene derecho a la autodefensa, ¿no se deduce que se tiene derecho a usar medios apropiados para ejercerla? Conceder que alguien tiene un derecho a la autodefensa, pero negarle los medios para defenderse es eliminar el derecho supuestamente concedido”. Bajo este entendido, es innegable que las armas de fuego son medios eficaces y efectivos de defensa propia y que la suspensión de las mismas debe hacerse de manera excepcional. Es por esto que incluso plantea que efectivamente es el Estado quien debe hacerse cargo del monopolio de las armas y quien debe ser muy específico al regular las mismas, ya que a pesar que David DeGrazia, coautor del texto, plantea que la autodefensa pasa a segundo plano si el Estado considera que es probable que ocurran muchos accidentes o desgracias al permitir el uso de armas por parte de particulares, Hunt rechaza esta concepción, distinguiendo 2 tipos de riesgos, riesgo de tipo, “impuesto a la población general por un grupo de personas: quienes poseen o portan armas” y el riesgo de símbolo, “que es impuesto por agentes particulares (incluyendo cuerpos corporativos)”. En este caso, frente al riesgo de tipo, Hunt plantea que este entendido no puede ser la base argumentativa para la coerción, ya que, si el Estado prohíbe que la población pueda ejercer su derecho de defensa propia solo porque puedan ocurrir accidentes al permitir las armas, estaría penalizando o castigando a unos por los errores de otros. 1.

Sin lugar a dudas, Colombia ha sido un país que en el pasado e incluso actualmente ha sido golpeado por la violencia, los grupos al margen de la ley y la delincuencia común; es por esto que a lo largo de los años se ha permitido y regulado el porte y la tenencia de armas, dejando previamente establecido quienes podrían optar a obtener dicho permiso. Sin embargo, hace aproximadamente 4 años el Estado ha decidido realizar la suspensión general del permiso de porte y de tenencia de armas, por lo que se hace necesario analizar la regulación jurídica del mismo y los fundamentos legales para su existencia. La constitución política de Colombia, establece en el artículo 223 “**Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.** Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale”

En el texto señalado se realizan dos interpretaciones muy importantes. En primer lugar se reivindica que nadie puede portar ni tener un arma sin permiso de la autoridad competente, esto es, se deben cumplir unos requisitos para poder optar a dicho permiso, existiendo una serie de filtros - los cuales se analizaran más adelante - para poder acceder legalmente a un arma, por lo que desde la misma constitución se inicia la regulación del porte y tenencia de armas y se le da al Estado la facultad para que sea quien controle el monopolio de las armas y para que sea quien permite a los ciudadanos que se encuentren enmarcados en ciertas causales, que puedan

1. https://mises.org/wire/philosophy-gun-control

acceder a un arma. De otro lado, renglón seguido, la constitución establece puntualmente los casos en los cuales el permiso no puede extenderse; sin embargo es de vital importancia señalar que precisamente en esa frase es que se fundamenta el carácter EXCEPCIONAL de la suspensión del permiso de porte y tenencia de armas, lo cual claramente se está desconociendo, ya que se le está interpretando de manera errónea al considerar que dicha suspensión puede hacerse de manera generalizada y reiterativa, dejando de lado su carácter excepcional y tomando notas de absolutismo.

Es por esto necesario ampliar nuestra visión y mirar cómo en otros países, en los cuales se permite el porte y tenencia de armas, se evidencia un alto nivel de seguridad y confianza de parte de los ciudadanos, se tiene un alto grado de cultura e incluso existen bajas tasas de homicidios con armas de fuego.

En países como Rusia, Serbia y la Republica Checa, basta con ser mayor de edad para poder optar por tener un arma, así como en Finlandia y en Suiza, que son unos de los países más seguros del mundo, el 25% de la población tiene un rifle en sus hogares. En estos países, aunque el porte de armas no se encuentra consagrado en la constitución como un derecho, se ha visto necesario permitir e incluso promover la tenencia y porte de armas, con el fin de darle herramientas a sus ciudadanos para que salvaguarden su integridad. De otro lado, solo 3 países consagran en su Constitución el derecho del porte y tenencia de armas, siendo estos Guatemala, México y EEUU, este último uno de los países que más fuerte y arraigada tiene esta concepción, en el cual de cada 100 habitantes 90 tienen armas de fuego; derecho protegido y amparado por la Segunda Enmienda a la Constitución Política de los EEUU en la cual se establece la protección al derecho que tiene el pueblo de poseer y portar armas. Frente a este tema, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha establecido que, si bien el derecho a portar y poseer armas es individual y se debe respetar, así mismo no es absoluto y se debe regular la producción y compra de las mismas. De acuerdo con lo informado por el portal en línea PanAm Post, en su artículo titulado “EEUU demuestra que más armas legales equivale a menos crímenes violentos - Los crímenes vinculados a armas descendieron 68 % y los delitos violentos 48,6 % en el mismo periodo que más armas se vendieron en EEUU,

423 millones de armas de fuego, según los datos recientemente publicados del organismo estatal a cargo del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.”

De acuerdo a la información suministrada, se logró concluir que “En contraste a lo que sucede en países de Hispanoamérica donde la hiperregulación de las armas ha otorgado el monopolio a quienes ejercen la ley, las fuerzas de seguridad del Estado y a los grupos criminales que actúan por encima de la ley, como los grupos de crimen organizado, en EEUU los ciudadanos tienen derecho a defenderse y han logrado contrarrestar el crimen. Caracas, Venezuela, que p[erdió el derecho a portar armas bajo el mando de Hugo Chávez](https://es.panampost.com/mamela-fiallo/2019/08/06/amlo-eeuu-mexico-armas/), ha sido el mayor ejemplo, como la ciudad con más homicidios. Ahora [México, con más de 100 homicidios por día](https://es.panampost.com/mamela-fiallo/2019/09/04/mexico-record-homicidios-amlo/) y la segunda ciudad más violenta del mundo, Acapulco, vive el año más violento de su historia y muestra cómo la rigidez en el porte de armas deja vulnerable al ciudadano que respeta la ley. Mientras que en EEUU son cada vez más los ciudadanos que legalmente acceden a armas de fuego. Más de [25 millones de personas se registraron en el 2019](https://www.kfyrtv.com/content/news/National-background-checks-on-gun-sales-approaching-record-numbers-565908591.html) para ser portadores de armas en los EEUU”. 2.

Es por esto, por esa hiperregulación de las armas, que los ciudadanos del común, que no tienen cómo defenderse de quienes quieran obrar en su contra de manera delictiva, han perdido cada vez más la capacidad de ejercer la protección de sus derechos y sus intereses, quedando así en manos del Estado que si bien en su papel de protector trata de cumplir con sus funciones, es incapaz de cumplir a cabalidad con esa obligación latente de protección a la comunidad de las constantes agresiones por parte de delincuentes; pero el cual por otro lado no brinda los mecanismos y herramientas adecuadas para el ejercicio de la defensa propia. Y es que no es un secreto que es la necesidad de protección y seguridad por parte de los ciudadanos, lo que ha llevado a que los mismos se vean obligados a auto defenderse y a defender a sus familias, ante posibles ataques delictivos.

1. https://es.panampost.com/mamela-fiallo/2019/12/09/eeuu-armas-legales/

Curiosamente en EEUU las masacres que se han propiciado con armas de fuego son lugares que se denominan “libres de armas”, lo cual no puede ser solo una coincidencia, ya que es muy probable que el delincuente que quiera atentar contra la vida y la integridad de una persona o número de personas que se encuentren reunidas, lo va a pensar dos veces si es consiente que las mismas tienen cómo defenderse y que probablemente no puede ejecutar su plan delictivo.

Frente al caso concreto en nuestro país, actualmente somos el quinto país donde más personas mueren por armas de fuego, según un estudio realizado por Journal of the American Medical Association (JAMA). Así mismo, entre enero y agosto del año 2019, de los 7.602 homicidios cometidos en Colombia, 5.567 fueron perpetrados con armas de fuego, es decir, el 73.2% de los mismos; por otro lado, aunque en el primer semestre del año 2019 las cifras indicaban que la tasa de homicidios se había reducido en un 6%, para noviembre de ese mismo año las cifras variaron y la tasa de homicidios incrementó en un 2.34% en comparación al año 2018 y sin contar diciembre, dejando 10.229 personas asesinadas. Analizando estas cifras, lo que llama la atención es que hace 4 años aproximadamente se suspendió el porte y tenencia de armas, argumentando el gobierno que dicha suspensión conllevaría mejoras notables y bajas de las tasas de violencia y homicidios del país, lo cual es contrario a los resultados reales que dicha medida ha generado, lo que nos lleva inmediatamente a concluir que lo que se ha logrado es promover la ilegalidad.

**2. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL PERMISO ESPECIAL PARA EL PORTE Y LA TENENCIA DE ARMAS**

Al entrar en materia y hablar del procedimiento que se debe seguir actualmente para obtener el permiso especial para portar o para tener armas, se debe tener presente que precisamente el articulo objeto de modificación con el presente proyecto de ley, estableció que actualmente solo se puede obtener un permiso “especial” y en unos casos determinados.

**2.1. ¿QUIEN OTORGA EL PERMISO?**

Los autorizados para gestionar un permiso especial son:

PERMISO REGIONAL

* Comandante de Brigada
* Jefe de Estado Mayor o sus equivalentes en de las Fuerzas (Ejercito, ARC, FAC)
* Oficial de Inteligencia - según corresponda,
* Asesor Jurídico de la Unidad Militar
* Jefe de la Seccional de Control de Armas

SUPERVISA: comandante de la División

PERMISO NACIONAL

* Jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos
* Oficial de Planeación y Evaluación del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos - DCCAE
* Oficial de Asuntos Nacionales del DCCAE
* Oficial de Seccional Principal del DCCAE
* Asesor Jurídico del DCCAE

SUPERVISA: representante del Comando General

Para tener permiso nacional, el solicitante debe haber adelantado el proceso regional y luego, desde esa jurisdicción, se hará el correspondiente envío al Comité.

Así mismo, la Inspección General de las Fuerzas Militares está a cargo del control a los permisos especiales, revisando los soportes de cada permiso otorgado y evaluando cada 3 meses la necesidad de mantener los permisos otorgado; además lleva control sobre los permisos no otorgados.

**2.2. ¿CUAL ES EL PROCEDIMIENTO PARA OPTAR POR EL PERMISO ESPECIAL?**

La directiva No. 6 del 2019 es la que establece el proceso de evolución para la eventual expedición de permisos especiales para porte o tenencia de armas. Los requisitos que se deben cumplir son:

1. Tener permiso de porte

2. Consulta de antecedentes en SIJIN para permiso regional y, adicionalmente, en DIJIN para permiso nacional.

3. Consulta de anotaciones en Fiscalía General de la Nación (procesos activos).

4. Consulta de antecedentes de Registro Nacional de Medidas Correctivas (contravenciones de Código de Policía, articulo 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas):

* Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.
* Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas.
* Agredir físicamente a personas por cualquier medio.
* Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio.
* Portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.
* Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia.

5. Carta dirigida al Jefe de Estado Mayor de la Unidad Operativa Menor de las Fuerzas (Brigada Ejercito, ARC, FAC), donde haya Seccional de Control Comercio de Armas, con datos personales y dirección del solicitante.

6. Justificación de las razones de urgencia o seguridad de requerir un permiso especial de porte, en la que exponga las razones de su solicitud, con soportes.

7. Certificación de residencia que permita verificar la jurisdicción de la Unidad Militar donde se solicita el permiso especial

8. Cuando se trate de permisos especiales de carácter nacional, adjuntar los documentos que demuestren su actividad comercial, laboral o profesional y la necesidad del porte del arma en distintas jurisdicciones.

9. Fotocopias de la cedula de ciudadanía y del permiso para porte vigente. 3.

Una vez analizados los requisitos y las autoridades competentes para expedir el permiso de porte o de tenencia de armas, llama la atención revisar la acogida que dicha directriz ha tenido, teniendo en cuenta las declaraciones dadas por la Asesora jurídica de presidencia, quien argumenta que: “los nuevos requisitos para optar por un permiso especial para portar un arma demuestran que antes había más discrecionalidad que ahora para entregarlo”.

**3. SENTENCIAS RELACIONADAS**

* **SENTENCIA C 077/93**

En la presente sentencia la Corte estableció que *“Durante el estado de conmoción interior, puede hacerse indispensable la adopción de un régimen especial para la concesión, suspensión o revocatoria de los permisos para el porte de armas.* ***La turbación del orden público y la alteración de la convivencia ciudadana, ocasionada por un elevado nivel de tensión social o violencia, justifica eventualmente la suspensión de los permisos para poseer o portar armas.*** *Se trata en últimas, e titularidades administrativas derivadas de actos autorizatorios del Estado, sujetos desde su constitución a moverse en un espacio restringido y restringible. El régimen de concesión y suspensión de los permisos para el porte de armas contenido en el decreto examinado corresponde a una materia legal que, durante el* ***estado de conmoción interior****, puede adoptarse directamente por el Presidente de la República”.*

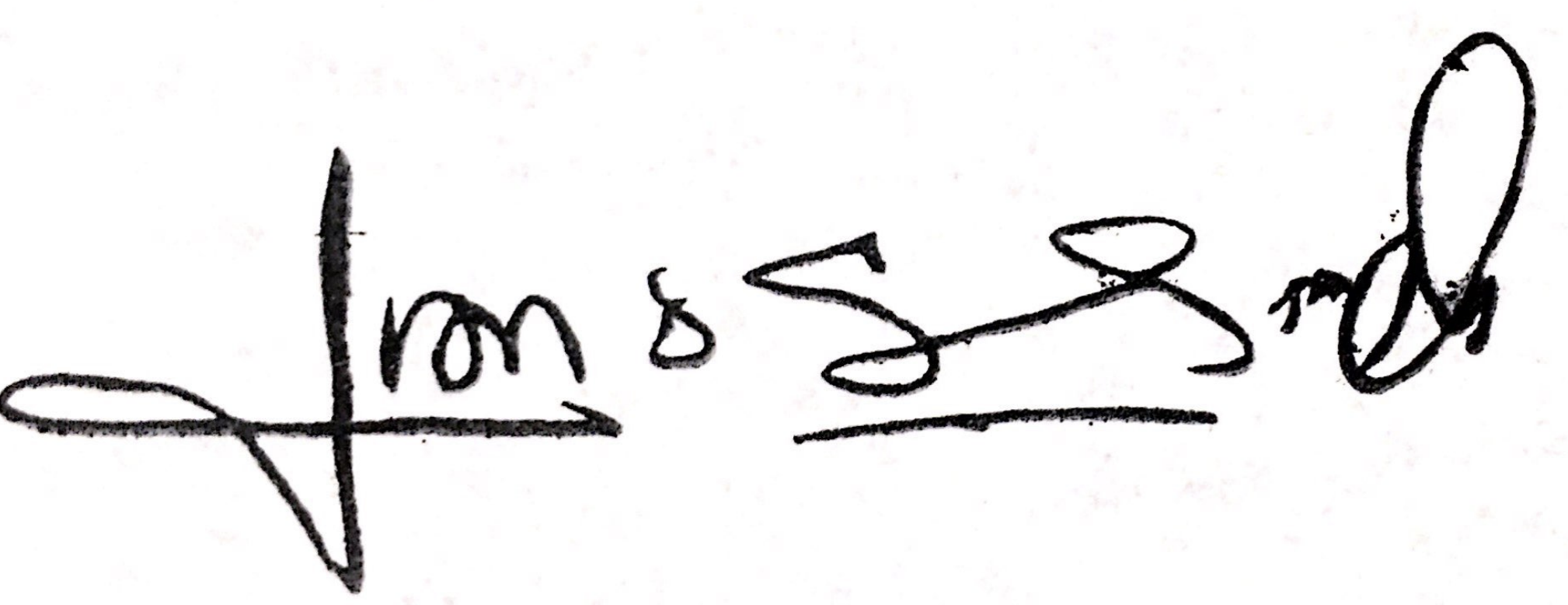
La presente posición de la Corte es uno de los soportes y sustentos más importantes para el presente proyecto de ley, ya que si bien se tiene claro la absoluta potestad y control que tiene el Estado sobre el monopolio de las armas, lo que se quiere lograr es que el porte y tenencia de armas sea como regla general permitido y controlado en el territorio y como carácter excepcional y en situaciones puntuales, como en el caso de conmoción interior, el mismo pueda ser suspendido durante un periodo de tiempo determinado, sin llegar a sobrepasarse dejando la suspensión vigente durante periodo de tiempo demasiado largos, dejándola casi que suspendida indefinidamente.

* **SENTENCIA C 296/95**

Frente al tema previamente tratado, sobre lo establecido en el artículo 223 de la Constitución Política, la Corte estableció *“En cuanto respecta al artículo 223 de la nueva Carta, es importante aclarar que, de las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente, parece claro que la violencia crónica padecida durante los cuarenta últimos años en el país influyó de manera determinante en los miembros de la mencionada Asamblea. Así, en relación con el monopolio estatal de armas, el artículo 223 se ocupó del tema en términos sustancialmente más restrictivos que el artículo 48 de la constitución de 1886. En efecto, según la norma que rige actualmente: "Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente".”*

* **SENTENCIA C 031/95**

Frente a la discrecionalidad que tienen las autoridades competentes para expedir los permisos correspondientes, así como para la suspensión de los mismos, la corte señaló “*La discrecionalidad para expedir los permisos correspondientes para posesión o porte de elementos bélicos* ***es una materia que compete desarrollar al legislador****. Potestad ésta que en criterio de la Corte no desconoce los principios ni la esencia del Estado de derecho, ni puede entenderse como un capricho omnipotente de quien encarne la autoridad de turno, ya que en todo caso la autoridad competente que expide el permiso debe ceñirse a los principios y procedimientos que para el efecto señala la ley*”; sin embargo, es importante señalar que no hay una regulación clara sobre los casos en los que la autoridad competente efectivamente puede suspender los permisos de porte o tenencia de las armas, ya que desde hace varios años atrás, de manera reiterativa y arbitraria, los permisos de porte y tenencia de armas se han suspendido por medio de Decretos presidenciales, sin encontrarse en un estado o momento que justifique dicha suspensión.



**H.R JUAN CARLOS WILLS OSPINA**

Representante a la Cámara